

# El movimiento por la Justicia Ambiental en EE.UU. Una breve historia

Michael K. Dorsey\*

El movimiento por la Justicia Ambiental en los Estados Unidos representa una respuesta multirracial y multitemática frente al fracaso del movimiento ambientalista dominante, mayormente blanco, que no logra incluir la justicia social y económica en sus preocupaciones sobre el estado de la Naturaleza. Ya en 1972 Herbert Marcuse había advertido que el divorcio entre los temas de equidad o justicia social y los temas ambientales, dejaría al movimiento ambientalista a merced

de «ataques efectivos aunque sin principios». <sup>1</sup> El movimiento por la Justicia Ambiental ha nacido contra el «racismo ambiental», es decir, la «discriminación racial en la elaboración de la política ambiental y en la aplicación de leyes y reglamentos, el intento deliberado de colocar las instalaciones de residuos tóxicos o peligrosos en comunidades de gente de color, la aprobación oficial de la presencia de venenos y contaminantes que amenazan la vida en nuestras comunidades, y la historia de exclusión de la gente de color del liderazgo del movimiento ambientalista». <sup>2</sup>

El racismo ambiental también existe en la adjudicación de bienes públicos beneficiosos a las comunidades blancas (parques, piscinas, áreas recreativas), y en la promoción exclusiva de miembros blancos dentro de las organizaciones ambientalistas.

A pesar del racismo ambiental y contra el racismo ambiental, las minorías y la gente de color han creado un movimiento por la justicia ambiental para conseguir algo más amplio e ideológicamente más complejo que el ambientalismo tradicional, dominado por blancos. Quienes abogan por la justicia ambiental consideran que las cuestiones sociales, políticas, económicas y ecológicas están juntas y deben analizarse como un todo. El ambientalismo tradicional debe cambiar de dirección, para incluir esa orientación hacia la justicia social y económica del movimiento por la justicia ambiental. Este artículo estudia (brevemente) el movimiento por la justicia ambiental, quienes lo apoyan, quienes disienten de él. Sitúo este movimiento en el contexto del movimiento ambientalista amplio dominado por blancos; estudio las luchas multirraciales y multitemáticas que han formado el movimiento; <sup>3</sup> finalmente, considero el papel del movimiento por la justicia ambiental como agente de cambio social en Estados Unidos.

\* Dpt. Anthropology, John Hopkins University, 404 Macauley Hall, 3400 N. Charles Street, Baltimore MD 21218. Este artículo está en curso de publicación en Legal Studies Forum. [«Environmental Justice» ha sido traducido aquí como «Justicia Ambiental» aunque «Justicia Ecológica» también sería una traducción adecuada en castellano. Muchos grupos activistas latinoamericanos o ibéricos tienen nombres como «Acción Ecológica» o «Acción Ecologista» o «Centro de Ecología Popular», y hablamos del «ecologismo» como un movimiento más radical que el «ambientalismo». El movimiento de «Environmental Justice» en Estados Unidos no es un movimiento conservacionista sino un movimiento socialmente radical. (N. del E.).

<sup>1</sup> Peter Marcuse, «Conservation for Whom», en James Noel Smith ed., *Environmental Quality and Social Justice in Urban America*, Conservation Foundation, Washington D.C., 1972, pp. 17-36.

<sup>2</sup> Benjamin Chavis, «The Historical Significance and Challenges of the First National People of Color Environmental Leadership Summit», en *Proceedings of the First National People of Color Environmental Leadership Summit, United Church of Christ Commission for Racial Justice*, Washington D.C., 1991.

<sup>3</sup> El movimiento por la justicia ambiental es uno de los primeros movimientos multiculturales y multirraciales importantes que se ha desarrollado en los Estados Unidos.

## LA HERENCIA DEL RACISMO EN EL AMBIENTALISMO ESTADOUNIDENSE TRADICIONAL

El ambientalismo en los Estados Unidos ha estado dominado por organizaciones predominantemente blancas. Esta blancura es una herencia de los más tempranos días del movimiento verde.<sup>4</sup> La blancura del movimiento verde nació de un racismo abierto que se convirtió en un racismo institucionalizado. Hace un siglo, era impensable que las minorías tuvieran acceso a los clubes de pesca y de caza que eran parte del primer movimiento por la conservación y preservación de la Naturaleza, precursor del ambientalismo actual.<sup>5</sup> La organización más progresista, el Sierra Club de California, deliberadamente excluía a negros y judíos y a otras minorías a través de una política de «adopción» de socios nuevos por socios antiguos, excluyendo a los no-blancos y no-cristianos.<sup>6</sup> Los parques y zonas costeras públicas, conseguidas por las primeras campañas ambientalistas, prohibían el acceso por motivo de «raza».

A pesar de este profundo racismo social e institucional, los líderes y los escritores que representan el ambientalismo tradicional se han permitido opinar que las poblaciones minoritarias no se han interesado por las cuestiones ambientales.<sup>7</sup> Hay dos grandes «teorías» al respecto. La primera es que la falta de preocupación ambiental se traduce en falta de presencia de las minorías en las organizaciones y en el movimiento ambientalistas. La segunda es que, a pesar que pudiera existir preocupación ambiental, no hay presencia de las minorías en el ambientalismo por falta de «cualificaciones sociales». La acción de las minorías en los temas ambientales estaría, pues, todavía por empezar en el seno del ambientalismo tradicional.<sup>8</sup> Ambas «teorías» son falsas. Suponen que la composición del núcleo del movimiento ambientalista permanecerá sin grandes cambios y que, si los grupos que ahora no participan, quieren participar, tendrán que unirse a un movimiento idéntico o parecido al actual. «En otras palabras, la mayor parte de los costos de la afiliación, cooperación y construcción de coaliciones serán pagados por los que ahora no están en el movimiento, pues ellos deberán hacer los esfuerzos y ajustes necesarios para participar».<sup>9</sup>

Estas «teorías» tienen en cuenta las barreras sociales y económicas que han impedido la participación en el ambientalismo predominante, pero ocultan un hecho fundamental, a saber, la gente de color está profundamente implicada en cuestiones ambientales y lo ha estado históricamente.<sup>10</sup> Al mismo tiempo, estas comunidades minoritarias han aprendido, de su contacto con el ambientalismo blanco, que para ellas era mejor la independencia.<sup>11</sup>

## POR LA JUSTICIA AMBIENTAL: UNA RESPUESTA MULTICULTURAL

Las luchas ambientalistas en las comunidades minoritarias tienen sus raíces en las luchas de Martin Luther King Jr., de

<sup>4</sup> Donald Snow ed., *Voices from the Environmental Movement: Perspectives for a New Era*. Island Press, Washington D.C., 1992, p. 75.

<sup>5</sup> Stephen Fox, John Muir and his Legacy: The American Conservation Movement, Little Brown, Boston, 1981, p. 351.

<sup>6</sup> Snow, op. cit. p. 76. Muchas secciones del Sierra Club mantuvieron está política hasta avanzados los años 1960.

<sup>7</sup> William Devall y George Sessions, «Conservation: An Upper Middle-Class Social Movement: A Replication», y J. Gale, «Conservation: An Upper Middle Class Movement», en *Journal of Leisure Research*, 2; Don Coombs, «The Sierra Club looks at itself», *Sierra Club Bulletin*, 57 (7), julio-agosto 1972.

<sup>8</sup> Snow, op. cit. p. 79.

<sup>9</sup> Dorceta Taylor, «Can the Environmental Movement attract and maintain the Support of Minorities?», in Bunyan Bryant and Paul Mohai eds., *Race and the Incidence of Environmental Hazards: a Time for Discourse*, Westview, Boulder, 1992, pp. 28-54.

<sup>10</sup> Snow, op. cit., p. 85. Recuerdo vívidamente, en una excursión en el Parque Nacional Adirondack, la estupefacción de una guardia del parque por el hecho que yo soy negro y estaba solo. Los únicos excursionistas negros que había visto pertenecían a grupos de delincuentes en rehabilitación. Más significativa es la pauta de votaciones del grupo de parlamentarios negros (Congressional Black Caucus) que, según la estadística elaborada por la Liga de Votantes Conservacionistas desde 1970, «muestra un apoyo para los temas conservacionistas mayor que ningún otro grupo político, y también mayor que cualquier otra muestra regional de ciudadanos, incluida California». Véase Henry Vance Davis, «The Environmental Voting Record of the Congressional Black Caucus», en Bryant and Mohai, eds., *Race and the Incidence of Environmental Hazards*, op. cit.

<sup>11</sup> Snow, op. cit., p. 93.

César Chávez y otros activistas de los derechos civiles, laborales y humanos. Chávez, por ejemplo, cuando dirigió la United Farmworkers Union (UFW), el sindicato de obreros agrícolas, defendió los derechos de los obreros agrícolas inmigrantes y trató de protegerlos de las aplicaciones de DDT, un pesticida que destruía sus vidas. La UFW en 1968, aliada a la California Rural Legal Assistance (CRLA), incorporó al Environmental Defense Fund (EDF) en su intento de prohibir el DDT, combinando las preocupaciones sobre la pérdida de vida silvestre, muerte de pájaros, etc. con la preocupación por la salud en el trabajo.<sup>12</sup> Por desgracia, la alianza UFW-CRLA-EDF fue meramente un «matrimonio de conveniencia», según el propio Charles Wurster, científico y co-fundador del EDF.<sup>13</sup> También en 1968, el reverendo Martin Luther King Jr. fue a Memphis en Tennessee [su último viaje antes de ser asesinado], en lo que hoy llamaríamos una misión de justicia ambiental: mejorar las condiciones de trabajo y de remuneración para trabajadores afroamericanos de las basuras municipales.<sup>14</sup> La historia del activismo ambiental en las comunidades de color es una historia que se basa sobre todo en la exigencia de derechos civiles para conseguir la justicia social y económica. Esas luchas no comparten los símbolos comunes del ambientalismo dominante tradicional: los grandes animales exóticos, los espacios naturales verdes, o la ame-

naza de cáncer de piel por la radiación ultravioleta al disminuir la capa de ozono.

A principios de los años 1980, un movimiento por la justicia ambiental empezó a surgir en los Estados Unidos en las organizaciones de derechos civiles y se convirtió en una parte explícita del orden del día y de las campañas públicas de multitud de organizaciones de base. Este movimiento llamó mucho la atención al combinar las luchas acerca de los recursos naturales o la contaminación ambiental con las luchas por el cambio social en las comunidades minoritarias.<sup>15</sup>

El primer episodio que llamó la atención nacional sobre el racismo y la injusticia ambiental ocurrió en Warren County, Carolina del Norte, en 1982.<sup>16</sup> Los funcionarios de la administración del estado decidieron localizar un vertedero de PCB en el condado de Warren, predominantemente negro.<sup>17</sup> Las protestas contra el vertedero fueron dirigidas por residentes locales en cooperación con una amplia alianza de grupos de derechos civiles, incluida la comisión de justicia racial de la United Church of Christ (UCC-CRJ), la Southern Christian Leadership Conference (SCLC) y el Congressional Black Caucus, de parlamentarios negros. Las manifestaciones culminaron en un intento de impedir que los camiones cargados con residuos con PCB [bifenilos policlorados] entraran en el vertedero. Más de 500 manifestantes fueron arrestados, muchos de ellos activistas de derechos humanos, o políticos conocidos como Joseph Lowery, antiguo compañero de Martin Luther King y director de la SCLC, y el delegado congresista (demócrata, del distrito de Columbia) Walter Fauntroy. Al final, las manifestaciones contra el «Vertedero de Hump» (así llamado en «honor» del gobernador de Carolina del Norte que lo había autorizado), fracasaron, pero sirvieron para poner de manifiesto la participación y liderazgo de afroamericanos locales en una cuestión ambiental. La lucha de Warren County destruyó dos mitos a la vez: que las comunidades minoritarias no se interesan por el medio ambiente y que las organizaciones e individuos de esas comunidades no tienen los conocimientos y las habilidades necesarios para ser ambientalistas. Se abrieron nuevas perspectivas para la protesta ambiental desde grupos de base, muy distintas al habitual *lobbying* de las organizaciones ambientalistas blancas en Washington.<sup>18</sup>

<sup>12</sup> Robert Gottlieb, *Forcing the Spring: The Transformation of the American Environmental Movement*, Island Press, Washington, 1993, pp. 242-243.

<sup>13</sup> Carta de Wurster a Laura Pulido, 4 Abril 1991, en Gottlieb, *op. cit.*, p. 243.

<sup>14</sup> Robert D. Bullard, «Environmental Justice for All», en *Unequal Protection, Environmental Justice and Communities of Color*, Sierra Club, San Francisco, 1994, pp. 3-4.

<sup>15</sup> Bullard, *op. cit.*, p. 5; Snow, *op. cit.*, p. 86; Dorceta Taylor, «Environmentalism and the Politics of Inclusion», en Bullard ed., *Confronting Environmental Racism: Voices from the Grassroots*, South End Press, Boston, 1993, pags. 53-62; Bullard, *Dumping in Dixie: Race, Class and Environmental Quality*, Westview, Boulder, 1990.

<sup>16</sup> Bullard, «Environmental Justice for All» *op. cit.*, p. 5-6; Inuiwai y Bryant, «Race, Poverty and the Environment», *EPA Journal*, 18 (1), marzo-abril 1992, pp. 6-8.

<sup>17</sup> *El Censo de Estados Unidos de 1980 da al condado de Warren una población de 16,232 personas, de las cuales 60 por ciento eran negras, y de éstas el 80 por ciento por debajo de la línea de pobreza.*

<sup>18</sup> Gottlieb, *Facing the Spring*, *op. cit.* p. 264.

El delegado congresional Walter Fauntroy, que había sido arrestado en Warren County, regresó a Washington D.C. y pidió a la General Accounting Office del gobierno de Estados Unidos que «determinara la correlación entre la localización de vertederos de residuos peligrosos y el estatus racial y económico de las comunidades vecinas, en la región IV de la Environmental Protection Agency». <sup>19</sup> La Oficina concluyó que «los negros constituyen la mayoría de la población en tres de las cuatro comunidades donde hay un vertedero de residuos peligrosos en la región IV de la EPA». <sup>20</sup> Aunque desgraciadamente una década después ese desequilibrio todavía no ha sido solucionado, <sup>21</sup> esa conclusión de la General Accounting Office tuvo afortunadamente un gran impacto ya que se convirtió en la base de un informe de ámbito nacional auspiciado por la UCC-CRJ sobre las características raciales y socioeconómicas de las comunidades amenazadas por residuos peligrosos. <sup>22</sup>

El informe de la UCC-CRJ señaló que para explicar la localización de los vertederos comerciales de residuos peligrosos, la raza era estadísticamente la variable más significativa de todas las variables consideradas. Las comunidades con vertederos de residuos peligrosos tenían mayor proporción de residentes raciales y étnicos, y tres de cada cinco negros o hispánicos vivían en comunidades con vertederos no controlados. <sup>23</sup> Esos resultados llevaron al director de la UCC-CRJ, Ben Chavis, a usar el término de «racismo ambiental» para caracterizar la localización de los residuos.

Los estudios de la General Accounting Office y de la UCC-CRJ permitieron plantear una premisa muy polémica: que la composición racial era el dato que mejor permitía predecir la localización de los residuos peligrosos en los Estados Unidos. Otras investigaciones sobre el racismo ambiental fueron emprendidas, <sup>24</sup> y surgieron críticas de su metodología y de sus conclusiones. Los críticos, a menudo académicos que contaban con apoyo de la industria química, discutieron la definición de «comunidad», señalaron que la proximidad a un vertedero o instalación de tratamiento de residuos peligrosos no se correlacionaba necesariamente con el riesgo, advirtieron que, en el momento de la selección de los lugares escogidos, no podía demostrarse que esos lugares fueran más pobres o con mayor proporción de minorías, y afirmaron tam-

bién que la proporción de residentes pertenecientes a minorías o de bajos ingresos en una comunidad determinada no era un dato suficiente para saber qué parte de esa población podía realmente sufrir un daño ambiental. <sup>25</sup>

Ante esas críticas, el Informe UCC-CRJ fue reexaminado en 1994, usando informaciones recientes. Goldman y Fitton hallaron que los impactos identificados por primera vez en 1987 habían empeorado. <sup>26</sup> En su estudio, concluyeron que entre 1980 y 1993 la concentración de residentes que pertenecían a minorías en comunidades con vertederos comercia-

<sup>19</sup> General Accounting Office, *Siting of Hazardous Waste Landfills and their Correlation with Racial and Economic Status of Surrounding Communities (GAO/RCED-83-168)*, GPO, Washington D.C., 1983. La región IV de la EPA incluye los estados de Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee.

<sup>20</sup> *Ibid.* p. 1.

<sup>21</sup> Bullard, «Environmental Justice for All», *op. cit.* p. 6.

<sup>22</sup> United Church of Christ Commission for Racial Justice, *Toxic Waste and Race in the United States: A National Report on the Racial and Socioeconomic Characteristics of Communities with Hazardous Waste Sites, Public Access*, Nueva York, 1987.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Además del estudio de la General Accounting Office de 1983 y del estudio de la UCC-CRJ, hay investigaciones detalladas sobre la existencia de racismo ambiental en Bryant y Mohai, eds., *Race and the Incidence of Environmental Hazards*, *op. cit.*; Michel Gelobter, «The Distribution of Air Pollution by Income and Race: 1970-1984», tesis de master, Energy and Resources Group, Univ. de California, Berkeley, 1987; Benjamin Goldman, *Not Just Prosperity: Achieving Sustainability with Environmental Justice*, National Wildlife Federation, Washington D.C., dic. 1993 (según este estudio, de 64 casos examinados para ver la relación entre raza, ingreso y la incidencia de peligros ambientales, todos menos uno mostraron disparidades ambientales correlacionadas con raza o ingreso, cualquiera que fuera el nivel de preocupación ambiental expresado o el lugar geográfico concreto).

<sup>25</sup> Para estas críticas, véase Vicki Been, «Market Dynamics and the Siting of LULUs: Questions to Raise in the Classroom about Existing Research», *West Virginia Law Review*, 96, p. 1069, 1994; Christopher Boemer y Thomas Lambert, «Environmental Injustice», *The Public Interest*, 118, 1995, pp. 61-82; Douglas Anderson et al., «Hazardous Waste Facilities: «Environmental Equity» Issues in Metropolitan Areas», *Evaluation Review*, 18(2), 1994, pp. 123-140. (El estudio de Anderson fue financiado por Waste Management Inc., la mayor empresa de gestión de residuos de Estados Unidos).

<sup>26</sup> Benjamin Goldman y Laura Fitton, *Toxic Wastes and Race revisited: An Update of the 1987 Report on the Racial and Socio-economic Characteristics of Communities with Hazardous Waste Sites, Carter for Policy Alternatives*, Washington D.C., 1994.

les de residuos peligrosos había aumentado de 25 por ciento a casi 31 por ciento, y que las minorías tenían una probabilidad de vivir cerca de un vertedero de residuos peligrosos que era 47 por ciento mayor que la de los blancos.

La protesta del condado de Warren y ese trabajo empírico posterior ayudaron a galvanizar un movimiento de base por la justicia ambiental en toda la nación. Al igual que en Warren County, muchas de esas luchas eran protagonizadas por afroamericanos. Por ejemplo, en los barrios del sur de Chicago, Hazel Johnson describía así la comunidad afroamericana en donde ella reside: «Vivo en un barrio que fue edificado sobre un vertedero. Nuestra área ha sido un vertedero durante 163 años. Es todo tóxico. Tenemos siete vertederos, una depuradora, la fábrica de la Ford, una fábrica de pinturas, varias empresas químicas, y siderurgias. El Calumet (un río que sirve de desagüe para la siderurgia) pasa aquí cerca. Está tan contaminado que haría falta 75 años para descontaminarlo, si realmente pueden hacerlo. Tenemos tres estanques que emiten 30.000 toneladas de venenos al aire cada año. También tenemos asbesto en nuestros apartamento».<sup>27</sup>

Después del incidente de Love Canal [en los años 1970], Johnson empezó a pensar si también en su zona habría una conexión entre industria pesada, fuentes de contaminación, y los problemas de salud tan corrientes en su comunidad, que

lleva el nombre de Altgeld Gardens.<sup>28</sup> Cuando una hija suya estaba encinta de cinco meses, «los médicos descubrieron que el bebé no tenía cabeza ni espalda», y tuvo que abortar.<sup>29</sup> Este incidente hizo que Johnson preguntara a otros residentes de Altgeld Gardens sobre su salud. Los resultados fueron alarmantes. «Muchos vecinos tenían enfermedades serias, y más del 95 por ciento se quejaba de problemas respiratorios, de irritaciones en la piel y en los ojos, pero no eran simples irritaciones, eran muy severas, especialmente en los niños. Un vecino tenía un hijo de ocho años que usaba un inhalador para respirar, todos los días».<sup>30</sup>

Johnson y otros miembros de la comunidad formaron People for Community Recovery, una organización ambientalista que en 1982 era la *única* en todo el país cuyo domicilio oficial estaba en un barrio de viviendas de propiedad pública.<sup>31</sup> Esta organización ha crecido mucho y hoy tiene más de mil residentes como miembros. En junio de 1996 auspiciaron la primera cumbre regional de Justicia Ambiental en el Midwest<sup>32</sup> con la idea de juntar a más de 400 representantes de organizaciones para ponerse de acuerdo en una estrategia regional de justicia ambiental.

Analogamente a lo sucedido en Altgeld Gardens en Chicago, las y los afroamericanos de Harlem en Nueva York en 1988 fundaron la West Harlem Environmental Action (WHEACT). Esta organización trató de educar y movilizar a los residentes de Harlem para lograr mejoras en la situación de contaminación del aire y del agua, uso de la tierra y espacios públicos, residuos tóxicos, transporte, patrimonio histórico y justicia ambiental en general.<sup>33</sup> Según Vernice Miller, quien fundó esta organización, WHEACT empezó a existir «porque vimos que estábamos albergando una cantidad desproporcionada de instalaciones municipales, de incineradoras y de plantas de depuración de efluentes».<sup>34</sup> WHEACT ha tratado de expandir su acción para abarcar también a las comunidades latinas e hispanicas de Harlem, y para proponer planes de desarrollo social y económico.<sup>35</sup>

WHEACT, de Harlem en Nueva York, y People for Community Recovery de Altgeld Gardens en Chicago, simbolizan las luchas de las comunidades afroamericanas para conseguir la justicia ambiental, pero hay otros participantes en esas luchas además de las comunidades afroamericanas. Son luchas

<sup>27</sup> Hazel Johnson, «Living in Chicago's Toxic Doughnut», in Charles Lee ed., *Proceedings of the First National People of Color Environmental Leadership Summit*, op. cit., 1991, pp. 87-88.

<sup>28</sup> Acerca de Love Canal y su importancia en la reorientación del movimiento ambientalista en Estados Unidos, véase por ej. Gottlieb, *Forcing the Spring*, op. cit., pp. 186-188.

<sup>29</sup> Karl Grossman, «From Toxic Racism to Environmental Justice», *The Environmental Magazine*, 3 (3), 1992, pp. 28-35.

<sup>30</sup> Marianne Lavelle, «Community Profile: Chicago - An Industrial Legacy», *National Law Journal*, 15 (3), 1992, p. S3.

<sup>31</sup> Lavelle, op. cit.

<sup>32</sup> *Conversación con Ruzel Gudsii, Fondo de Defensa Legal de la NAACP*, abril 1996.

<sup>33</sup> Robert D. Bullard, *People of Color Environmental Groups: Directory 1992*, Charles Stewart Mott Foundation, Flint, Mich., 1992.

<sup>34</sup> Vernice Miller, «Newsmaker Interview: Changing Times», interview por Nadia Steinzer, *ZPG Reporter*, 28 (2), marzo-abril 1996, p. 5.

<sup>35</sup> *Ibid.*

multiraciales, multiculturales y multitemáticas. Así, la Red del Sudoeste por la Justicia Económica y Ambiental (SNEEJ, Southern Network for Economic and Environmental Justice) con sede en Albuquerque, Nuevo México, se fundó en 1989 y coordina a organizaciones [de americanos nativos, de mexicanos-americanos y otras] de ocho estados.<sup>36</sup> Richard Moore, uno de los co-directores, explica: «No sólo registramos a los votantes, les estimulamos a votar. También hacemos manifestaciones, marchas, reuniones de la comunidad y reuniones con representantes oficiales. Hacemos de todo, y da frutos».<sup>37</sup> SNEEJ hace *lobbying*, investiga, organiza, educa y emprende acciones directas con respecto a muchas cuestiones ambientales en comunidades de color en todo el Sudoeste.

Precisamente, esta Red (SNEEJ) inició la acción para cambiar drásticamente la manera de operar de las organizaciones ambientalistas blancas que son las más poderosas, las Diez Grandes o como ahora se las llama, el Grupo Verde. En 1990 la SNEEJ y más de cien activistas latinos, afroamericanos y nativoamericanos enviaron una serie de cartas a esas organizaciones predominantes, argumentando que el «racismo y la blancura del movimiento ambientalista» de Estados Unidos se había convertido en su talón de Aquiles,<sup>38</sup> y quejándose de la falta de responsabilidad de ese movimiento frente a las comunidades minoritarias en Estados Unidos y frente a las comunidades [mayoritarias] del Tercer Mundo. Además, las cartas mencionaban las prácticas habituales de reclutamiento de personal en las Diez Grandes organizaciones ambientalistas como muestra de racismo, ya que no había apenas gente de color en posiciones de influencia y liderazgo. Según Richard Moore, «las cartas eran realmente acerca de quién tenía poder en el movimiento ambientalista y cómo iba a ser usado».<sup>39</sup>

El desafío directo a las organizaciones ambientalistas dominantes, y la creciente evidencia de la relación causal entre composición racial y localización de peligros ambientales (que se llamó «racismo ambiental»), llevó a que una coalición multirracial planeara la Primera Conferencia Cumbre Nacional de Líderes Ambientales de Gente de Color en Washington D.C. entre el 24 y el 27 de octubre de 1991.<sup>40</sup> La cumbre tenía como objetivo explícito «cambiar los términos del debate sobre la naturaleza del movimiento ambientalista»,<sup>41</sup> y «facilitar a los líderes de gente de color un proceso continuo

de reforzamiento de las organizaciones y comunidades nacionales, regionales y locales que están implicadas en conflictos por la justicia ambiental; dar una oportunidad para iniciar el diálogo entre líderes de gente de color y los dirigentes [blancos] de las organizaciones ambientalistas nacionales; identificar cuestiones centrales de la política ambiental desde la perspectiva de los líderes de gente de color; y tener un impacto en el proceso de toma de decisiones públicas en interés de la justicia ambiental a niveles federal, estatal y municipal».<sup>42</sup>

Un resultado de esa cumbre de 1991 fueron los Principios de la Justicia Ambiental. Este documento que representa el esfuerzo acumulado de tres días de conferencia detalla las tareas de las comunidades de gente de color que intentan salvar a sus miembros de la destrucción ambiental. El preámbulo a los Principios indica que la cumbre fue un intento de «crear un movimiento nacional e internacional de todas las gentes de color para luchar contra la destrucción y contra la apropiación ajena de nuestras tierras y comunidades...».<sup>43</sup> La cumbre dio a la gente de color, a los líderes de las bases y a los activistas un espacio verdaderamente propio.<sup>44</sup> Esta gran reunión fue la primera ocasión en que grupos comunitarios y

<sup>36</sup> Richard Moore, «Introduction of the Principles of Environmental Justice», in *Proceedings of the First National People of Color Environmental Leadership Summit*, op. cit., pp. 17-20.

<sup>37</sup> Grossman, *Toxic Racism*, op. cit., p. 32.

<sup>38</sup> Kent Paterson, «Will Green Teams widen their Spectrum?», *Voces Unidas*, 2 (1). También Gottlieb, *Forcing the Spring*, op. cit., pags. 260-266, con una discusión detallada de las cartas a las Diez Grandes, que son el Sierra Club, Natural Resources Defense Council, Environmental Defense Fund, National Wildlife Federation, Friends of the Earth, Audubon Society, Environmental Policy Institute, Izzak Walton League, World Wide Fund for Nature, y Conservation International.

<sup>39</sup> Citado en Gottlieb, *Forcing the Spring*, op. cit., p. 260.

<sup>40</sup> Esa cumbre tuvo una estructura de participación en tres niveles. Los delegados, que pertenecían a minorías (africano-americanos, asiáticos o de islas del Pacífico, latinos y americanos nativos), tenían voz y voto. Los llamados «participantes» tenían voz pero no tenían voto. Y los observadores no tenían voz ni voto. En los tres niveles hubo personas de minorías o gente de color, pero los blancos tuvieron estatus solamente de «participantes» u observadores.

<sup>41</sup> Lee, «Introduction», *Proceedings of the First...*, op. cit., p. viii.

<sup>42</sup> Op. cit. p. vi.

<sup>43</sup> «Principles of Environmental Justice», in *Proceedings of the First...*, op. cit. p. xlii.

<sup>44</sup> Op. cit. p. ix.

redes regionales diversas de América del Norte, de Puerto Rico y de las islas Marshall, se reunieron a través de sus representantes para enfrentar la injusticia ambiental y el racismo ambiental, dando la oportunidad a más de 300 representantes de compartir sus ideas, sus éxitos y sus campañas y estrategias para poner freno a la industria contaminadora y para obtener apoyo de los gobiernos.

## LOS OBJETIVOS DEL MOVIMIENTO POR LA JUSTICIA AMBIENTAL

La conferencia en la cumbre de 1991 mostró para siempre más que un movimiento ambientalista multirracial era posi-

ble.<sup>45</sup> Los grupos de justicia ambiental dirigidos por líderes de minorías han intentado lograr cambios en tres instituciones: 1) las organizaciones ambientalistas tradicionales, bajo dominio blanco; 2) el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo la Agencia de Protección Ambiental (EPA);<sup>46</sup> y 3) las compañías transnacionales contaminadoras, especialmente las que manejan residuos y las que tienen un pasado contaminador.<sup>47</sup>

1) Los Grupos u Organizaciones Verdes.- Tras las cartas enviadas por la SNEEJ, las organizaciones ambientalistas dominantes, las Diez Grandes, empezaron a responder, prometiendo contratar a más personal perteneciente a minorías e incluir en sus agendas de problemas ambientales algunos de particular interés para las comunidades de gente de color<sup>48</sup>: el envenamiento por plomo<sup>49</sup>; la carga desproporcionada de riesgos por residuos peligrosos, pesticidas y otros tóxicos; y la herencia de los residuos nucleares que afecta especialmente a comunidades de americanos nativos.<sup>50</sup> Pero las Diez Grandes no añadieron a esos nuevos «programas de justicia ambiental» ahora introducidos, un cambio institucional interno. Por ejemplo, la National Wildlife Federation (NWF) se negó abiertamente a dar explicaciones sobre la ausencia de personas pertenecientes a minorías en los puestos de dirección, con la excusa dada por su director ejecutivo que «todo el mundo es profesional, los que descargan los camiones en el almacén y los abogados que van a la Corte Suprema a defender nuestras posiciones».<sup>51</sup> Esta misma organización, la NWF, como también la National Audobon Society, aunque decían defender la Justicia Ambiental, tenían en sus consejos de dirección a representantes de algunas de las compañías más contaminadoras del país.<sup>52</sup> Así pues, a pesar de la nueva retórica, de los modestos esfuerzos por contratar otro personal, de las esporádicas actividades de apoyo a grupos comunitarios minoritarios, y de la ampliación de sus agendas, las organizaciones predominantes continuaron atrapadas en el terreno y en los tipos de acciones que las separan de la nueva política ambientalista influida por la raza, la etnicidad, el género y la clase social.<sup>53</sup>

2) Moviendo al Estado.- Los promotores de la justicia ambiental han logrado algunos cambios en los organismos del gobierno y en sus políticas. Al empezar, los esfuerzos se

<sup>45</sup> Ben Chavis citado por Karl Grossman, «The People of Color Environmental Summit», en *Unequal Protection: Environmental Justice and Communities of Color*, Sierra Club Press, San Francisco, 1994, p. 273.

<sup>46</sup> Recientemente otros organismos gubernamentales han sido cuestionados por quienes abogan por la justicia ambiental, entre ellos, el Departamento del Interior, el de Agricultura, el de Trabajo, el de Salud y Servicios Humanos, el de Vivienda y Desarrollo Urbano, el de Energía, el de Defensa y el de Transporte, y también el Centro de Control de Enfermedades, la Agencia de Sustancias Tóxicas, la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. Véase Deoohn Ferris, «A Call for Justice and Equal Environmental Protection», en *Unequal Protection*, op. cit. en nota 45, pp. 298-319.

<sup>47</sup> Pueder verse una lista excelente de conflictos y éxitos de comunidades contra industrias especialmente contaminadoras en Kristin Schafer et al., *What Works. Report n. 2. Local Solutions to Toxic Pollution (The Environmental Exchange, Washington D.C., 1993)*.

<sup>48</sup> Gottlieb, op. cit. p. 261. Véase también Paul Mohai y Bunyan Bryant, «Most Important Environmental Problems to Blacks in the Detroit Area (Table)», en *Detroit Area Study, Univ. of Michigan, Ann Arbor, 1990*.

<sup>49</sup> Véase Janet Phoenix, «Getting the Lead out of the Community» en Bullard ed., *Confronting Environmental Racism: Voices from the Grassroots*, South End Press, Boston, 1992.

<sup>50</sup> Véase International Physicians for the Prevention of Nuclear War and The Institute for Energy and Environmental Research, *Plutonium: Deadly Gold of the Nuclear Age*, International Physicians Press, Cambridge, Mass., 1992.

<sup>51</sup> Gottlieb, op. cit., pp. 261-162.

<sup>52</sup> Véase Dana Aiston, «Moving beyond Barriers» en *Proceedings of the First...*, op. cit. pp. 103-106. Los representantes de Waste Management Inc., responsables de colocar el mayor vertedero de residuos peligrosos en Alabama en una comunidad 75 por ciento afro-americana, eran al mismo tiempo miembros de los consejos directivos de la Audobon Society y de la National Wildlife Federation.

<sup>53</sup> Gottlieb, op. cit. p. 262.

dirigieron a la ÉPA.<sup>54</sup> En 1990, antes de la conferencia en la cumbre de 1991, una coalición de académicos, investigadores y activistas de la base, se reunieron en la Facultad de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Michigan. Este grupo que se llamó la Coalición de Michigan envió un memorandum a la EPA, al Departamento de Salud Pública y al Consejo de Calidad Ambiental, con copias a los gobernadores de los 50 Estados, a diversos legisladores y a los parlamentarios negros y latinos (agrupados en sus Congressional Caucuses), solicitando que la EPA y los otros organismos gubernamentales se comprometieran a «emprender investigaciones para avanzar en el conocimiento de los riesgos ambientales en comunidades de minorías o de bajos ingresos; iniciar proyectos para aumentar la consciencia y la comunicación de riesgos a minorías o grupos de bajos ingresos; requerir que las consideraciones de equidad racial y socioeconómica fueran incluidas en los estudios de impacto ambiental reglamentarios; asegurar que los estudios geográficos actuales y futuros de riesgo ambiental contengan también la dimensión racial y socioeconómica; aumentar la capacidad de los colegios y universidades históricas negras y de otras instituciones minoritarias para participar en el desarrollo de la equidad ambiental; nombrar asistentes especiales para la equidad ambiental con capacidad de decisión en esos organismos del gobierno; y hacer una declaración pública sobre la política de equidad ambiental».<sup>55</sup>

La EPA se demoró en contestar. El administrador de la EPA, republicano, creó un grupo de estudio de la equidad ambiental, para considerar las demandas de la Coalición de Michigan,<sup>56</sup> y tras dos años de deliberaciones la EPA publicó un informe en dos volúmenes: «La equidad ambiental: reducir el riesgo en todas las comunidades».<sup>57</sup> La publicación del informe desembocó en una polémica porque se filtró al mismo tiempo un memorándum interno en el cual algunos funcionarios de la EPA describían el movimiento por la justicia ambiental como «peligroso» y «amenazador», «una de las cuestiones ambientales más explosivas por aparecer». La EPA debía actuar antes que «la cuestión de la justicia hacia las minorías llegué al punto de inflamación, aquel momento en una controversia pública emocionalmente intensa en que los grupos activistas finalmente persuaden a los grupos más sólidos

e influyentes (organizaciones de derechos civiles, sindicatos, iglesias) para que actúen irresponsablemente».<sup>58</sup>

A pesar del escepticismo reaccionario de la EPA, la Coalición de Michigan influyó con éxito sobre ella para que creara la Oficina de Equidad Ambiental dentro de la propia EPA, inaugurada en 1992: un reconocimiento oficial al trabajo empírico que mostraba que la composición racial de las comunidades estaba correlacionada con los daños ambientales. La mera existencia de esta Oficina ayudó a legitimar al movimiento de justicia ambiental y a sus promotores, aunque no pueda decirse que la EPA esté verdaderamente comprometida en hacer frente al racismo ambiental y en promover la justicia ambiental dentro del gobierno. La Oficina de Equidad Ambiental, con un presupuesto minúsculo, no es una institución investigadora o política de vanguardia.<sup>59</sup>

La administración de Clinton intentó mostrar su compromiso con el movimiento de justicia ambiental dictando la Orden Ejecutiva 12898 de 11 de febrero de 1994. Esta Orden exige que «todas las agencias del gobierno federal desarrollen una estrategia de justicia ambiental» que «identifique y haga frente a los efectos de sus programas, políticas o actividades, desproporcionadamente altos y adversos para la sa-

<sup>54</sup> Ferris, *op. cit.* en la nota 47.

<sup>55</sup> Bryant y Mohai, *op. cit.* en nota 10, pp. 4-5.

<sup>56</sup> Hay que notar que Reilly, indignado de que se hablara de «racismo ambiental» en la EPA, prefirió usar «equidad ambiental». Véase William Reilly, «Environmental Equity: EPA's Position», *EPA Journal* 18(1) marzo-abril 1992. La Coalición de Michigan temió que ese cambio de nombre implicara la negativa a admitir la evidencias estadística de que la composición racial era un indicador de impactos ambientales. De hecho, el informe de la EPA concluyó que faltaban datos acerca de los efectos sobre el ambiente y la salud según las raza y el ingreso. Además, «equidad ambiental» era una expresión que no comprometía a remediar las situaciones sino simplemente a una «distribución equitativa de la contaminación».

<sup>57</sup> EPA, *Environmental Equity: reducing Risk for All Communities*, vol. 1, Workgroup Report to the Administrator (EPA230-R-92-008), vol. 2, Supporting Documents (EPA230-R-92-008A), EPA, Washington D.C., 1992.

<sup>58</sup> Lewis S.W. Crampton, Associate EPA Administrator, memorandum confidencial (con el título «Environmental Equity: Proposed Communication Plan») a Gordon L. Binder, jefe del staff, Washington D.C., 15 nov. 1991, 10 pages.

<sup>59</sup> La Oficina de Equidad Ambiental cambió de nombre en 1993 y ahora se llama la Oficina de Justicia Ambiental.

lud humana o el ambiente de las poblaciones minoritarias o de las poblaciones de bajos ingresos». En un memorándum publicado el mismo día que la Orden Ejecutiva, el Presidente hizo notar que la Orden tiene por objeto dirigir «la atención federal a las condiciones ambientales y de salud humana de las comunidades minoritarias y de las comunidades de bajos ingresos con el fin de lograr la justicia ambiental». Al reconocer la existencia de la injusticia ambiental, Clinton quiso aliarse al movimiento pero la Orden tiene un último párrafo que revela la debilidad de esa alianza y la ambivalencia de la administración demócrata, similar a la ambivalencia republicana: «Esta Orden sólo pretende mejorar la administración interna de la rama ejecutiva y no crea ningún derecho, beneficio, responsabilidad sustantiva o de procedimiento, que pueda argüirse en la ley o en equidad por alguien contra los Estados Unidos, sus agencias, sus funcionarios o cualquier persona».<sup>60</sup> Así pues, puede cuestionarse cuál es la posición auténtica de la administración de Clinton frente a la justicia ambiental.<sup>61</sup>

3) El poder de las empresas.- Una de las razones que explican por qué los incidentes de contaminación ocurren en comunidades minoritarias y de bajos ingresos más que en otras, es que esas comunidades presentan menor resistencia a la industria contaminadora.<sup>62</sup> Así, Cerrell Associates, una consultora privada del Estado de California, aconsejó a la Junta de Gestión de Residuos de California en 1984 que las plantas para quemar basuras y producir energía fueran colocadas en

áreas donde fuera menos probable que hubiera oposición, incluyendo comunidades con predominio de minorías, de personas mayores, de bajos ingresos y católicas.<sup>63</sup> Los grupos socioeconómicos medios y altos poseen más y tal vez mejores recursos para oponerse a las amenazas de contaminación. El movimiento de justicia ambiental se ha opuesto muchas veces a que se localicen residuos peligrosos en comunidades de minorías, pero la práctica continúa. Además, es realmente alarmante que, cuando el gobierno federal exige la limpieza de sitios contaminados y cobra las multas, suele hacerlo en áreas de comunidades blancas más que en áreas de comunidades minoritarias. Lavelle y Coy han mostrado que las multas judiciales por infracciones a la ley que regula los incidentes de contaminación —la Resource Conservation and Recovery Act— varían más del 500 por ciento según la composición racial aunque menos del 2 por ciento si se tiene en cuenta el ingreso.<sup>64</sup> Las comunidades minoritarias están amenazadas de un doble peligro: carecen de recursos para luchar por sí mismas contra la localización de residuos, y no tienen suficiente protección del gobierno contra la contaminación.

La cuestión se complica todavía más porque la puerta entre las industrias contaminadoras (o las industrias que viven de la contaminación) y la EPA se cierra y se abre con facilidad. Los representantes de las industrias contaminadoras frecuentemente dejan sus altos puestos en sus empresas para trabajar en altos puestos en la EPA.<sup>65</sup> En algunos casos los consejos directivos de los grupos ambientalistas dominantes comparten miembros con los consejos directivos de empresas contaminantes. Cuatro directores de la EPA han sido miembros de los consejos directivos de empresas contaminantes o que viven de la contaminación. William Ruckelhaus, director de la EPA desde 1971 a 1973 y de 1983 a 1985, fue miembro del consejo directivo de Monsanto y de Browning-Ferris, Inc. (BFI). BFI es la segunda compañía de gestión de residuos no-peligrosos del país. Walter Barber, administrador de la EPA en 1981, fue, antes de ir a la EPA, vice-presidente de la mayor compañía de gestión de residuos peligrosos, Chemical Waste Management Inc. Douglas Costle, ex-administrador de la EPA, y Lee Thomas, sub-administrador, han tenido puestos respectivamente como presidente y principal ejecutivo de diversas empresas de residuos peligrosos.

<sup>60</sup> La Orden Ejecutiva 12898 en Federal Register, 59 (6), pp. 7629-7633. Véase también Michael K. Dorsey, «Environmental Justice: Just How Green is the Bill», Michigan Toxics Watch, 5 (1-2), primavera 1994.

<sup>61</sup> Michael Fisher, «Environmental racism claims brought under Title VI of the Civil Rights Act», Environmental Law, 25, 1994, pp. 285-334.

<sup>62</sup> Bullard ed. Confronting Environmental Racism, op. cit. p. 17.

<sup>63</sup> Political Difficulties Facing Waste-to-Energy Conversion Plant Siting. California Waste Management Board (Los Angeles: Cerrell Associates Inc., 1984), citado por Bullard ed., Confronting Environmental Racism, op. cit.

<sup>64</sup> Marianne Lavelle y Marcia Coyle, «Unequal Protection: The Racial Divide in Environmental Law», National Law Journal 15 (3), 1992. Las multas por contaminación en áreas blancas, en promedio, US\$ 335.566, en áreas de minorías, US\$ 55.318; en áreas de altos ingresos, US\$ 109.606; en áreas de bajos ingresos, US\$ 113.491.

<sup>65</sup> Información de William Sanjour.

El movimiento de justicia ambiental ha tratado de hacer frente a las industrias contaminantes de diversas maneras. El movimiento ha exigido una política de NIAMBY (Not in Anyone's Backyard, no en el patio trasero de nadie), más allá del NIMBY usual.<sup>66</sup> Al darse cuenta que NIMBY (no en mi patio trasero) significa a menudo «no en el patio trasero de una persona blanca», y por tanto «sí en el patio trasero de una persona de color o pobre», el movimiento de justicia ambiental ha repetido que «ninguna comunidad debería tener esos venenos industriales y tóxicos».<sup>67</sup> Por desgracia, para muchas comunidades de color ya es demasiado tarde incluso para NIMBY: los vertederos, las incineradores, las fundiciones de metales, las plantas petroquímicas o las bases militares ya están en su vecindad.<sup>68</sup> La preocupación por la salud de la familia y de la comunidad es el hilo que une a un amplio espectro de activistas en el movimiento de base por la justicia ambiental. Los conflictos contra las industrias contaminantes son de hecho muchas veces batallas para tener más democracia y participación en las decisiones que afectan a la salud y subsistencia humanas. Según Eric Mann, co-director del Centro de Estrategia de Comunidades y Trabajo de Los Angeles, «existe mucha gente no sólo en Los Angeles sino en todo el país que, sin darnos nosotros cuenta, ha llegado a conocer muy bien la amenaza que el poder concentrado de las empresas representa para nuestras esperanzas de democracia política y económica».<sup>69</sup> Las organizaciones que piden justicia ambiental contra las industrias contaminadoras no suelen ser puristas e irrazonables, normalmente (como señalan Austin y Schill) «no quieren que los contaminadores hagan las maletas y se vayan sino que limpien la suciedad que han producido».<sup>70</sup>

Quienes abogan por la justicia ambiental piden responsabilidades públicas a los contaminadores.

### CONCLUSIÓN

Al desafiar la blancura del ambientalismo tradicional, el movimiento por la justicia ambiental de Estados Unidos enraizado en las minorías, ha levantado cuestiones muy profundas sobre quién representa a esas comunidades amenazadas por el «racismo ambiental». Los promotores de la justicia ambiental contestan que ellas y ellos son quienes las representan. El movimiento por la justicia ambiental permite comprender los aspectos raciales y étnicos de los temas ambientales y los aspectos ambientales de la justicia social y económica. Al elucidar la relación entre raza y medio ambiente, los promotores de la justicia ambiental demostramos cuán apropiado y eficaz es formar coaliciones, coordinadoras u organizaciones multitemáticas de amplia base multirracial y multicultural.

<sup>66</sup> Schafer, *op. cit.* en nota 47, p. 10.

<sup>67</sup> Benjamin Chavis, «The Historic Significance and Challenges of the First National People of Color Environmental Leadership Summit», en *Proceedings*, *op. cit.*, p. 8.

<sup>68</sup> Regina Austin and Michael Schill, «Black, Brown, Red and Poisoned», en *Unequal Protection*, *op. cit.* 1994, p. 71.

<sup>69</sup> Labor Community Strategy Center, *L.A.'s Lethal Air: New Strategies for Policy Organizing and Action*, Los Angeles, 1991.

<sup>70</sup> Austin y Schill, «Black, Brown, Red and Poisoned», *op. cit.* p. 71; Jim Schwab, *Deeper Shades of Green: The Rise of Blue-Collar and Minority Environmentalism in America*, Sierra Club Press, San Francisco, 1994.

